

C.A. de Santiago

Santiago, diez de mayo de dos mil veintidós.

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:**

**PRIMERO:** Jorge Pablo Gómez Edwards, en representación de Canal 13 SpA, viene en interponer recurso de apelación (reclamación de ilegalidad) en contra del acuerdo adoptado por el Consejo Nacional de Televisión (en adelante, el “CNTV”) por Ord. No 161, de fecha 11 de marzo de 2021, mediante el cual se impuso a Canal 13 una sanción equivalente a 100 UTM, por infracción al art. 1° de la Ley 18.838 que Crea el Consejo Nacional de Televisión.

Señala que en cuanto a la forma de interponer el recurso el art. 34 de la Ley 18.834, dispone que la “resolución que imponga amonestación, multa o suspensión de transmisiones será apelable ante la Corte de Apelaciones de Santiago”.

Sostiene que el CNTV ha multado a Canal 13 porque, habría incurrido en una transgresión al art. 1° de la ley 18.838 que crea el CNTV, norma que establece el principio de “correcto funcionamiento”, al exhibirse en horario de menores un contenido del Programa “Bienvenidos” del 9 de noviembre de 2020, en el que “se relativiza una situación donde un alumno insulta a su profesora” ya que con ello “podría promoverse – y quizás imitarse- un modelo de conducta de carácter negativo, pudiendo afectar con ello la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud”. En concreto, se reprocha el “revisar, en horario de protección de menores, un video ‘viral’ donde un alumno insulta a su profesora, lo abordan de manera liviana y jocosa, matizado, además, con música de comedia”.

Explica que el programa matinal de Canal 13 “Bienvenidos, en su emisión del día 09 de noviembre de 2020, alude a situaciones inesperadas acaecidas en reuniones telemáticas comentadas en un contexto de comicidad o de tono humorístico, oportunidad en que se exhibe el incómodo momento en que una profesora revisa los trabajos de una clase a través de la plataforma zoom, en donde luego de explicar cómo será evaluado el trabajo a un grupo de estudiantes, uno de sus alumnos sin darse cuenta que su micrófono no estaba silenciado, le comenta en tono angustiado a su padre «Papá, papá



ahora la vieja (se silencia un exabrupto) quiere abierto el volcán, menos mal que no lo tengo listo».

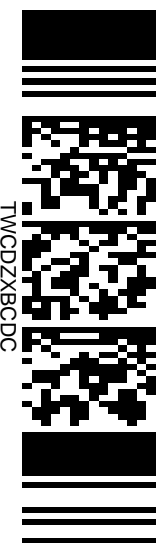
Frente al comentario la profesora reacciona y pregunta «¿Oye quién es el que habló eso?», ahí se corta el video y se pasa a comentar el mismo por los panelistas del programa, lo cual estuvo al aire aproximadamente 6 minutos y 42 segundos.

Luego la recurrente reproduce los diálogos del programa en cuestión.

En cuanto al derecho, sostiene el recurrente que la resolución administrativa sancionatoria tiene un vicio de legalidad al sancionar una emisión de televisión por su contenido “liviano y jocoso, matizado con música de comedia”, pues viola la garantía constitucional del art. 19, N° 12 de libertad de emitir opinión e información, “de cualquier forma”. En este sentido, argumenta que, en nuestro ordenamiento jurídico, el comunicador tiene el derecho a elegir la forma en que emite la información, sin que se le pueda reprochar por adoptar una u otra forma. Cita un recurso de queja interpuesto en contra de una multa del CNTV a otro canal de televisión, en donde el propio CNTV señala que “las libertades de emitir opinión y de informar ciertamente comprenden la de tomar y comunicar una determinada posición, que corresponde al primero de los reproches formulados por el Consejo indicado en el motivo precedente”. Explica que la ltma. Corte de Apelaciones ha seguido la misma línea en cuanto a considerar que no es legítimo reprochar la forma en que el comunicador decide emitir la información u opinión, cita jurisprudencia.

Indica que este vicio de ilegalidad del ente administrativo atenta también contra los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, que consagran el Principio de Supremacía Constitucional y de Fuerza Normativa o vinculación directa de la Constitución.

Señala que se infringe el principio de tipicidad: La descripción de la conducta prohibida no se realiza en la ley ni en el reglamento, en el sentido de que la potestad sancionatoria de la Administración, como cualquier actividad administrativa, debe sujetarse al principio de la legalidad, conforme a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política; exigencia que corrobora el artículo 2° de la Ley N° 18.575 de 1986,



Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Como consecuencia de lo anterior, también entiende infringido el artículo 19 N°3 de la carta fundamental. Agrega sobre el punto, que el Tribunal Constitucional ha reconocido por años la aplicación del principio de tipicidad en el ámbito sancionatorio administrativo, por tratarse también de una expresión del ius puniendi estatal.

Que en los artículos 1 y 12 letra I) de la ley 18.838 que crea el CNTV no se contempla la prohibición de emitir contenidos “en forma liviana y jocosa, matizados con música de comedia”. Por último, sostiene que potestad reglamentaria del CNTV en materia de determinar contenidos prohibidos de televisión se materializa con la dictación de las “Normas Generales de Contenidos de las Emisiones de Televisión”, publicadas en el Diario Oficial de fecha 21 de abril de 2016.- en donde se detallan con precisión cuáles son los contenidos prohibidos en horario de menores, y el horario en que se impide su emisión.

En último término, sostiene que existe una desproporcionalidad en la sanción impuesta, cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional y doctrina. Añade que, en el caso de autos, la multa de 100 UTM aparece totalmente desproporcionada, en atención a que la ley no contempla criterios objetivos, reproducibles y verificables para determinar la gravedad de la infracción y la sanción proporcional, quedando esto último a la mera discrecionalidad y arbitrio del CNTV.

Solicita en definitiva absolver a Canal 13 del cargo formulado con costas o en subsidio rebajar la sanción al mínimo de amonestación que contempla el art. 33, No 1 de la Ley 18.838, u otra sanción inferior a la impuesta que prudencialmente US. Itma. estime procedente.

**SEGUNDO:** ANTONIO MADRID ARAP, abogado, en representación del Consejo Nacional de Televisión, viene en informar el presente recurso.

Sostiene el recurrido que El Consejo Nacional de Televisión recibió 11 denuncias contra del programa “Bienvenidos”, emitido por la concesionaria Canal 13 SpA (C13) el día 9 de noviembre de 2020 dentro del horario de protección de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA). Cita y enumera las denuncias.

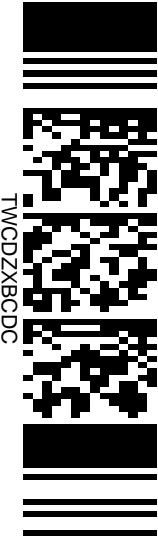


Ante el grave tenor de las denuncias, esta entidad procedió a fiscalizar la emisión, y su Departamento de Supervisión y Fiscalización emitió un informe técnico, que propuso al H. Consejo Nacional de Televisión formular cargos al canal por la presencia, en la emisión, de elementos que abren el riesgo de vulneración de la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud. Decidiendo, luego de analizar el informe elaborado al respecto, formular cargo a Canal 13 presuntamente por infringir el artículo 1° de la Ley 18.838 con la transmisión en horario de protección de menores de un segmento de su programa “Bienvenidos”, el día 9 de noviembre de 2020 por exhibir un modelo de conducta negativo para Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) al relativizar y banalizar insultos proferidos por un alumno a una profesora, lo que afectaría la formación espiritual e intelectual de NNA.

Informa la recurrida que el cargo fue notificado válidamente y Canal 13 formuló sus descargos, los que ponderados en su sesión de fecha 22 de febrero de 2021, el H. Consejo determinó fundadamente rechazarlos y aplicar en base a su reincidencia y alcance territorial, una multa de 100 UTM, en armonía con el artículo 33 N°2 de la Ley 18.838.

Señala la recurrida que la sanción se fundamenta, entre otros, en el artículo 1°, inciso cuarto de la Ley 18.838, que dispone que se entenderá por correcto funcionamiento de los servicios de televisión el permanente respeto, a través de su programación, de la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud, y de todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes. Luego hace mención al artículo 12 letra I) de la misma ley, explicando que el Consejo deberá dictar las normas generales destinadas a impedir que los menores se vean expuestos a programación y publicidad que pueda dañar seriamente su salud y desarrollo físico y mental.

Cumpliendo el mandato de reglamentación, y con el mismo énfasis protectorio, el artículo 1°, letra e) de las Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de Televisión (NGCET), estableció una franja horaria de protección de NNA, definida como aquella “dentro de la cual no podrán ser exhibidos contenidos no aptos para menores de 18 años que puedan afectar la formación espiritual e intelectual de



la niñez y la juventud”. En este marco, su artículo 2° señala: “Se establece como horario de protección de los niños y niñas menores de 18 años, el que media entre las 06:00 y las 22:00 horas”.

Plantea que los descritos artículos 1° y 12° letra I de la Ley 18.838, constituye el núcleo legal de la conducta sancionada, materializado por medio de la colaboración reglamentaria que impera en derecho público y por el ejercicio de las potestades interpretativas que el Texto Político y la Ley 18.838 entregan al CNTV.

En consecuencia, las Normas sobre Contenidos de las Emisiones de Televisión (NGCET) cumplen el rol de particularizar –no crear- conceptos que se encuentran establecidos en la ley que integran el principio del correcto funcionamiento, al alero del Interés Superior de niño que dimana y es consagrado por tratados internacionales ratificados por Chile, cuyo contenido, en lo atinente a derechos fundamentales, integra de igual modo el principio del correcto funcionamiento de la televisión, en armonía con el artículo 1°, inciso cuarto de la Ley 18.838, y como lo ha ratificado la reciente sentencia del Tribunal Constitucional Rol N° 1110-21 (a requerimiento del propio reclamante de autos).

Sostiene el CNTV que el contenido sancionado no resultó apropiado para ser transmitido en horario de protección de NNA puesto que abrió la posibilidad de influir en su proceso de socialización al banalizar una conducta nociva para con terceros en el marco del aprendizaje escolar, al ser justificada por un ambiente jocoso y de comedia por parte de los panelistas encargados de transmitir la información, abriendo la puerta al aprendizaje vicario de tal conducta. (considerando décimo y siguientes de la sanción), situación que incluso ha sido estimada como contraria a los objetivos educativos de los medios de comunicación social y la dignidad de las personas (profesora insultada) por el propio Tribunal Constitucional en su fallo Rol N° 1110-21 (c. 5° y siguientes).

Así entonces, el cúmulo normativo reseñado ampara la legalidad y legitimidad de esta medida y esta interpretación protectiva, partiendo de la base de que la libertad de expresión tiene límites intrínsecos a su ejercicio constituidos por los derechos de los demás y la dignidad de



las personas, tópicos encarnados en el principio del correcto funcionamiento de la televisión que se erige como condición del legítimo ejercicio de tal libertad.

Cita jurisprudencia sobre la materia, sosteniendo que a partir de ésta, han llegado a la conclusión que las materias objeto de la sanción se relacionan con el imperio y protección del Interés Superior de NNA en tanto norma de derecho fundamental, que, al estar contenida en un tratado internacional sobre derechos humanos forma parte del bloque de garantías constitucionales, y por lo tanto es autoejecutable.

Añade la recurrida que la sanción fue impuesta estrictamente sobre la base de las potestades que la Ley 18.838 y el constituyente han entregado al Consejo para proteger a las audiencias vulnerables; lo que ha sido reconocido, también, por el Tribunal Constitucional dentro del reconocimiento de la televisión como función de utilidad pública.

Por esto, su conducta fue negligente, y tal antijuridicidad es suficiente para amagar el bien jurídico formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud establecido por la Ley 18.838, por ello, la sanción expresó que para que la infracción se entienda consumada no es necesario que se haya verificado un daño material concreto al bien jurídico que la normativa protege o que se acredite dolo o culpa, sino que se haya desplegado la conducta que pone en peligro dicho bien jurídico vulnerando la regla preventiva que se viene comentando.

Por otra parte debe tener presente que ni en el procedimiento administrativo ni en este recurso de reclamación la permissionaria logra desvirtuar los reproches formulados, pues no aportó probanzas ni contravirtió la transmisión de estos contenidos en el horario de protección de menores, por lo que no corresponde que en esta instancia se reviva una discusión sobre la apreciación de los antecedentes de hecho tenidos en vista para sancionar, sino verificar que se haya respetado el debido proceso y CNTV haya actuado en base a las facultades que le otorgan la Constitución y la Ley 18.838, fundamentando su decisión.

En cuanto a la sanción, señala que el recurrente parece dar contenido absoluto a la libertad de expresión, lo que no es cierto. Para



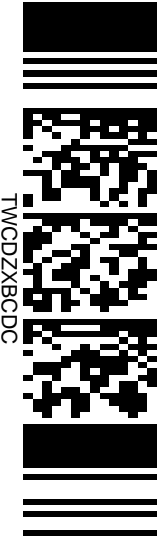
la recurrida, los derechos y principios reseñados, al alero del principio del correcto funcionamiento y la dignidad de las personas se erigen como límites infranqueables a la libertad de expresión e información, por lo tanto esta no es absoluta como parece entenderlo la concesionaria al justificar que corresponde a las concesionarias y comunicadores “decidir la forma de entregar la información” matizándola “con música de comedia”. Cita jurisprudencia.

Señala que ampararse genéricamente en el ejercicio de la libertad de expresión no es un argumento idóneo ni suficiente para excluir la responsabilidad infraccional de la concesionaria por cuanto, el derecho y el deber de informar a la comunidad de diversos hechos no se vería afectado si se hace entrega de la información de manera cuidadosa con atención a los bienes jurídicamente tutelados por la ley 18.838 y si hubiese cumplido con su rol educativo asociado a su calidad de medio de comunicación social -en definitiva con su función social-, especialmente cuando los contenidos son emitidos en un horario de protección de niños y niñas, quienes podrían verse afectados por la exposición de algunos contenidos audiovisuales.

En esta línea, lo que el Consejo discierne y estima como motivo suficiente para sancionar es el contexto narrativo de la transmisión, donde los comentarios y actitudes de quienes validan una determinada situación o actividad son los que terminan justificando una situación violenta, inconveniente o disruptiva, validación que puede afectar el proceso de socialización de NNA, como lo demostró el acuerdo sancionatorio amparado en literatura científica, y debidamente motivada en cuanto a los hechos y al derecho, como lo exige la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos N° 19.880.

Explica que la sanción ha sido impuesta en base a los principios constitucionales de juridicidad, legalidad y tipicidad. Destaca que lo reprochado no es la jocosidad en sí sino el efecto en los sujetos en formación de que la información sea transmitida de esa forma, aspecto que parece desconocer el recurso de C13.

Finalmente, se debe tener en cuenta que en derecho administrativo sancionador -siempre reconociendo que el imperio del debido proceso es cabal-, el tratamiento garantístico de los sujetos



regulados no adquiere la intensidad del principio de tipicidad que rige en materia penal, por lo que el CNTV en uso de sus competencias legales y constitucionales está plenamente facultado para reglamentar e interpretar en sus decisiones los conceptos que en la Ley 18.838 requieren ser dotados de contenido.

Así, la conducta infraccional en virtud de la cual se puede perseguir la responsabilidad de los canales es siempre la misma en estos casos, no transmitir contenidos para adultos en horario de protección; y son la Constitución, los tratados internacionales y la Ley 18.838, la preceptiva que contiene el núcleo legal esencial de la obligación que se ha exigido, normativa que faculta y obliga al CNTV a adoptar todas las medidas para que los menores no se vean expuestos a programación que pueda dañar su psiquis, en base al mandato de optimización emanado del Interés Superior de NNA.

Por otra parte, indica que el recurso de reclamación se aprecia que C13 desconoce la propia fuente legal de la conducta sancionada, pues el recurso cita diversas conductas que no provienen del bloque legal que ampara el horario de protección de los niños ahora aplicado.

Además, indica que la sanción impuesta es proporcional a la gravedad de la infracción, puesto que CNTV se ha ceñido al principio de juridicidad para determinar la cuantía de la multa, pues se han aplicado los criterios que exige la Ley 18.838. Refiere que, el sistema sancionatorio del Título IV, de la ley N°18.838, contempla taxativamente un catálogo de sanciones que se aplica gradualmente, conforme la gravedad de la infracción (amonestación, multa, suspensión de las transmisiones y caducidad de la concesión).

En lo que respecta al principio de juridicidad y de proporcionalidad respecto a la determinación de las reincidencias, el recurrente yerra su interpretación al señalar que el criterio de gravedad de la infracción no se aplica para determinar el monto de multa, pues su interpretación contradice el propio artículo 33°, inciso primero de la Ley 18.838, que señala expresamente que las infracciones a las normas de ese cuerpo legal -y a las que el CNTV dicte en uso de sus facultades-, serán sancionadas “según la gravedad de la infracción”, para con posterioridad detallar las sanciones aplicables, es decir, este





factor incide en la elección y graduación de todas las sanciones del artículo 33° de la Ley 18.838.

Por último sostiene que dada la naturaleza de este procedimiento de reclamación de ilegalidad, la Corte no se encuentra facultada para rebajar multas o cambiar la sanción salvo que se detecte un vicio de legalidad en la sanción, así lo declare, invalide la sanción y dictamine lo adecuado al caso.

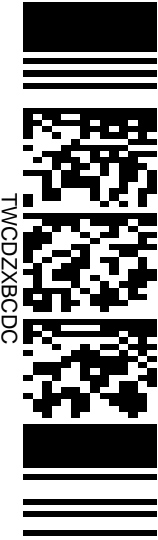
Solicita en definitiva rechazar el recurso con costas.

**TERCERO:** Que, si bien el arbitrio deducido se denomina como apelación en el artículo 34 de la Ley N° 18.838, lo cierto es que jurisprudencialmente se ha asentado que se trata de una reclamación jurisdiccional de ilegalidad, de modo que en el caso se debe determinar si el acuerdo sancionatorio incurre en ilegalidades que hagan procedente dejarlo sin efecto o reducir la multa impuesta como sanción.

**CUARTO:** Que, como cuestión previa, es dable consignar que la realidad fáctica en que se apoya la sanción, no está discutida por la recurrente, la que destina su reclamo más bien a cuestionar la configuración de la infracción, esgrimiendo infracciones al principio del debido proceso, al principio de tipicidad y a la determinación de la naturaleza de la infracción, y cuestionando el quantum de la sanción.

**QUINTO:** Que al respecto se debe indicar que el artículo 1° de la Ley N° 18.838, define correcto funcionamiento como "permanente respeto, a través de su programación, de la democracia, de la paz, el pluralismo, el desarrollo regional, el medio ambiente, la familia, la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud, los pueblos originarios, la dignidad humana y su expresión en la igualdad de derechos y trato entre los hombres y mujeres, así como el de todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes".

Por su parte su artículo 12, letra I), entre las funciones y atribuciones del Consejo Nacional de Televisión, dispone: "El Consejo dictará las normas generales para sancionar la transmisión de programas que contengan violencia excesiva, truculencia, pornografía



o participación de niños o adolescentes en actos reñidos con la moral o las buenas costumbres. Asimismo, el Consejo deberá dictar las normas generales destinadas a impedir que los menores se vean expuestos a programación y publicidad que pueda dañar seriamente su salud y su desarrollo físico y mental".

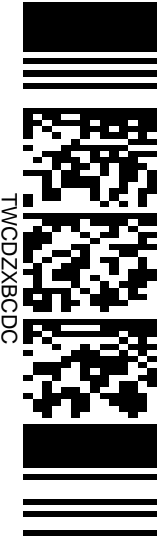
**SEXTO:** Que en cuanto a la alegación de la falta de tipicidad y de la errónea interpretación de la naturaleza de la infracción, se debe indicar que del tenor de la normativa transcrita se evidencia que el Consejo Nacional de Televisión se encuentra mandatado y facultado por ley para velar por que los servicios de televisión se ajusten estrictamente a un "correcto funcionamiento", pudiendo aplicar las sanciones que correspondan en caso de que se infrinja dicha exigencia. Así, parte de dicho correcto funcionamiento tiene por objeto de protección y el respeto de la formación espiritual e intelectual de la niñez y de la juventud, principio fundamental que se encuentra estrechamente vinculado a los derechos humanos.

De ello se evidencia la intención del legislador de consagrar una normativa con un fin preventivo, esto es, el de evitar que los menores de dieciocho años pudieran tener acceso en determinados horarios a contenidos televisivos no aptos para la niñez y adolescencia conforme a criterios técnicos que, ciertamente, obedecen hoy y siempre a valores y objetivos sociales y éticos, que son dinámicos en el tiempo.

Lo antes indicado, encuentra su sustento además en la circunstancia del establecimiento en las Normas Generales sobre Contenido de las Emisiones de Televisión de un horario de protección- que va desde las 6:00 a las 22:00 horas- el que justamente tiene por objeto impedir la exhibición de contenidos que puedan afectar la formación espiritual e intelectual de la niñez y juventud.

Ello, trae aparejado que la naturaleza de la infracción sea de peligro abstracto, tal como lo indicó el Consejo al hacerse cargo en su decisión de dicha alegación, no siendo necesario que se produzca un daño material al bien jurídico protegido por la norma, sino que se haya desplegado la conducta.

**SEPTIMO:** Que dicha conclusión se refrenda más si se considera que lo que se reprocha por el órgano en comento, es que la

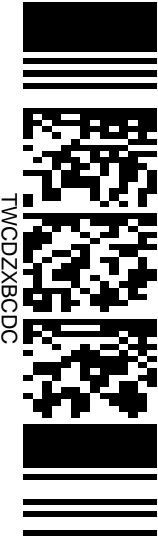


transmisión tiene como contexto narrativo comentarios y actitudes de quienes validan una determinada situación o actividad y que terminan justificando una situación violenta, inconveniente o disruptiva, validación que puede afectar el proceso de socialización de NNA, como lo demostró el acuerdo sancionatorio amparado en literatura científica, y debidamente motivada en cuanto a los hechos y al derecho, como lo exige la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos N° 19.880.

De ello, se advierte que la conducta reprochada al recurrente, no solo infringe las normas del correcto funcionamiento de los servicios de televisión, sino importa también una infracción a las disposiciones de la Convención Internacional de los Derechos del Niño que el Estado de Chile está obligado a amparar y proteger. En efecto, la emisión de un programa con el contenido descrito en la sanción en alza en horario protegido- pese a existir una franja horaria en que podría haber emitido dicho programa conforme a la normativa sobre la materia, lo que vulnera el interés superior de los menores, consagrado en el orden nacional e internacional, lo que se traduce en una conculcación grave al derecho a la salud psíquica de los menores de edad, tal como señaló el Consejo Nacional de Televisión en su decisión.

**OCTAVO:** Que asimismo, se debe consignar que la recurrida se hizo cargo en su decisión de todas las alegaciones efectuadas por la recurrente, fundando debida y detalladamente su decisión, especialmente descartando los descargos de la actora por no haber controvertido sustancialmente los cargos, no desconociendo que en el programa se exhibieron los contenidos reprochados, no evidenciándose la existencia de vicios invalidantes de la decisión, sino meras conclusiones divergentes de aquellas que se contienen en el Acuerdo impugnado, lo que, desde ya, hace inviable la reclamación de que se trata.

**NOVENO:** Que no se observa las vulneraciones al debido proceso esgrimidas por la recurrente, ya que se advierte que la actora fue notificada de los cargos, pudo efectuar sus descargos respectivos, en respeto del principio de contradictoriedad. Asimismo, de la lectura de los descargos que no cuestionó la ocurrencia de los hechos, sino



solo su calificación, siendo innecesario abrir un término probatorio, lo que en ningún caso le impedía acompañar en sus descargos los antecedentes que estimara necesarios para respaldar su postura, de lo que se evidencia que sí se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 34 de la citada ley.

**DECIMO:** Que en cuanto al quantum de la multa, es del caso señalar que el inciso 1º del artículo 33 de la citada ley, en su inciso final dispone que “las concesionarias de servicios limitados de televisión sólo podrán ser sancionadas en virtud de infracción a lo dispuesto en el inciso final del artículo 1º de esta ley”, por lo que en el caso ésta se encuentra ajustada al mérito de los antecedentes, pues la sanción podía alcanzar a una multa de hasta 400 UTM y el Consejo Nacional de Televisión sólo impuso una de 100 UTM, lo que se estima razonable y proporcional con la infracción cometida, más considerando el carácter de reincidente de la actora.

**UNDECIMO:** Que, en consecuencia, conforme a lo expresado y concluido en los motivos precedentes, de los que fluye que no existen antecedentes que permitan hacer variar ninguno de los fundamentos esgrimidos por la resolución en alzada, y por no advertir la existencia de alguna ilegalidad o reproche en el actuar de la recurrida, desde que se ha ajustado a las competencias que la ley le ha entregado, específicamente al marco legal impuesto en el artículo 1º transcrito precedentemente, el presente recurso será desestimado.

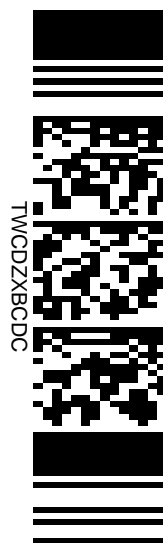
Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 18.838: **SE RECHAZA**, sin costas, el recurso interpuesto por CANAL 13 SpA en contra del Ordinario N° 161, de 11 de marzo de 2021, que la sancionó con una multa ascendente a 100 UTM.

**Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.**

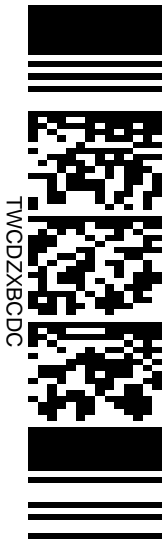
Redacción del ministro señor Aguilar.

**N°Contencioso Administrativo-155-2021.**

Pronunciada por la **Séptima Sala** de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Jorge Zepeda Arancibia e



integrada por el Ministro señor Alejandro Aguilar Brevis y por la Abogada Integrante señora Cecilia Latorre Florido. No firma la Abogada Integrante señora Latorre por encontrarse ausente.



Pronunciado por la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Jorge Luis Zepeda A., Alejandro Aguilar B. Santiago, diez de mayo de dos mil veintidós.

En Santiago, a diez de mayo de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

